

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN
DEMANDADOS	GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL S.A.S- R&C GOLD S.A.S. - GRUPO SANTILLANA CORPORATION S.A.S
RADICADO	05001-31-05-021-2018-00695 01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Bonificación - reajuste -sanciones moratorias.
DECISIÓN	Modifica y confirma

Medellín, Veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN** contra el **GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL S.A.S, R&C GOLD S.A.S.** y contra **GRUPO SANTILLANA CORPORATION S.A.S**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 038**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 07 de febrero de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis: El demandante se vinculó con el GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL S.A.S, mediante contrato de trabajo a término fijo, de duración un (1) año, desde el 17 de mayo de 2017, desempeñando el cargo de supervisor, con una asignación básica de un salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, resalta que percibía mensualmente bonificación por la suma de \$1.700.000, lo que a su juicio constituye salario.

Se afirmó que el demandante fue despedido por el representante del GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL S.A.S, de forma verbal, sin previo aviso y sin justa causa, el 29 de abril de 2018.

Se expresó que al demandante no se le realizó el pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de abril de 2018, esto es, en cuanto al pago de prestaciones proporcionales (liquidación), ni se le pagó reajuste de prestaciones sociales durante todo el tiempo de servicio teniendo en cuenta el salario real, esto es, desde el 17 de mayo de 2017 hasta el 29 de abril de 2018.

Se manifestó que entre las sociedades R & C GOLD S.A.S, GREEN ENVIROMENT S.A.S y GRUPO SANTILLANA CORPORATIO S.A.S, y de otra parte, GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S, se suscribió contrato de operación para beneficio de arenas con valores de oro, con duración indeterminada, de fecha 03 de mayo de 2017, y con base en dicho contrato se

demanda de manera solidaria a R & C GOLD S.A.S. y GRUPO SANTILLANA CORPORATIO S.A.S

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que hagan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se DECLARE: La existencia de un contrato de trabajo entre el señor JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN, y la empresa GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S, entre el 17 de mayo de 2017 y el 29 de abril de 2018, mediante contrato de trabajo a término fijo por un año; que existe solidaridad entre la empresa GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S, la empresa R & C GOLD S.A.S, y GRUPO SANTILLANA CORPORATIO S.A.S, respecto de todas las obligaciones laborales con el señor JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN; la terminación del contrato fue sin justa causa; que la bonificación mensual recibida por el señor JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLON, constituía salario; que la empresa demandada GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S, obró de mala fe en cuanto al no pago de salario real y prestaciones sociales, durante y al tiempo de la relación laboral.

SE CONDENE de manera solidaria a las empresas demandadas: Al pago de la indemnización por despido sin justa causa; al reajuste de las prestaciones sociales y demás obligaciones laborales, al igual que los aportes de la seguridad social durante toda la relación laboral; al pago de la indemnización por el no pago a la terminación de la relación laboral de los salarios y prestaciones sociales adeudadas a la fecha, correspondientes a un día de salario por cada día de retardo; que se indexen las sumas debidas al momento de la sentencia; y se condene al pago de las costas y agencias en derecho.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda, la curadora ad litem, en representación de todos los demandados, presentó contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones de las mismas. Frente a los hechos, advierte que no se trata de un contrato a término fijo como se indica en la demanda, sino, de un contrato de obra o labor, de acuerdo al documento anexo. Cuestionó además que, de acuerdo a la realidad contractual, GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S, no estaba obligada a realizar el preaviso para la terminación, por tratarse de un contrato de obra o labor.

Expresó también que, con base en el caso en concreto, no puede hablarse de un despido sin justa causa, y, por consiguiente, no es procedente ninguna indemnización a cargo del empleador ni de las empresas que conforman la parte pasiva.

Precisó también que el contrato se extendió hasta el 30 de abril de 2018, más no hasta el 29 de abril de 2018, como se relata en el libelo genitor, de acuerdo a la certificación laboral emitida por el GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S

Propuso como excepciones de fondo las que denominó: “*DESPIDO CON JUSTA CAUSA: TERMINACIÓN DE LA OBRA O LABOR, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES POR PARTE DEL EMPLEADOR, COMPENSACIÓN Y/ PAGO, BUENA FE: IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO CONFORME AL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T y PRESCRIPCIÓN.*”

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 07 de febrero de 2022, el juez de conocimiento declaró la existencia de un contrato de trabajo por obra o labor entre el demandante JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN y la demandada GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS, con vigencia

entre el 17 de mayo de 2017 y el 29 de abril de 2018. Declaró la terminación del contrato de trabajo por culminación de la obra contratada y determinó que la bonificación quincenal pagada al demandante constituía salario. Consecuencialmente, condenó a la demandada a pagar el reajuste de la liquidación final de prestaciones teniendo en cuenta un salario de \$2.437.717, del 17 de mayo de 2017 al **31 de diciembre de 2018 (sic)**, y de \$2.500.000 del 01 de enero-2018 al 29 de abril de 2018.

Concepto Pagado	Pagado	Debido	Diferencia
Cesantías	\$ 1,537,717	\$ 4,937,717	\$ 3,400,000
Intereses cesantías	\$ 184,526	\$ 592,526	\$ 408,000
Prima lega	\$ 1,537,717	\$ 4,937,717	\$ 3,400,000
Vacaciones	\$ 768,859	\$ 2,468,859	\$ 1,700,000
		TOTAL DEBIDO	\$ 8,908,000

Se condenó a la demandada a pagar ante la entidad de seguridad social en pensiones en que se encuentre afiliado el demandante, los aportes a la seguridad social en pensiones o su reajuste, teniendo en cuenta los siguientes valores: Salario del 17-may-2017 al **31-dic-2018** (sic), \$2.437.717, y del 1-ene-2018 al 29-abr-2018, \$2.500.000. Igualmente se declaró la solidaridad de las codemandadas GRUPO SANTILLANA CORPORATION SAS y R&C GOLD SAS en el pago de las condenas de reajuste de prestaciones y pago de la seguridad social o reajuste.

Finalmente se condenó a la demandada GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS a pagar al demandante la indemnización moratoria del art. 65 CST, a partir del 30-abr-2018, en cuantía de \$83.333 diarios durante 24 meses, y a pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. Se desestimaron las excepciones y se condenó en costas procesales.

Como fundamento de su decisión, indicó el A quo que no hay duda que entre el demandante JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN y la empresa GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS, se vincularon mediante

contrato de obra o labor, que da cuenta el texto que obra en el PDF 03 folio 23 ss. Determinó que, pese a que el contrato indica el término de un año como duración del contrato, lo cual haría presumir que se trata de un contrato a término fijo, lo cierto es que, de la lectura integral del documento, se concluye que el contrato suscrito por el demandante es uno de obra y labor, el cual está ligado a un contrato de operación suscrito por las codemandadas R & C GOLD S.A.S, GREEN ENVIROMENT S.A.S (quien no es parte en éste proceso) y GRUPO SANTILLANA CORPORATIO S.A.S, y GRUPO DE RECUPERACION ECOAMBIENTAL S.A.S.

En relación con la duración del contrato puntualizó el juez de instancia que no hay manifestación en el escrito de demanda, de cuándo ECOAMBIENTAL SAS, terminó la obra o labor y que tal situación pudo ser corroborada por el demandante, sin embargo, éste no compareció a la audiencia, concluyendo entonces el A quo, que en la fecha del despido, se produjo la terminación de la obra o labor, es decir, el 29 de abril de 2018, precisando además que tratándose de un contrato de obra o labor, no puede hablarse de un despido sin justa causa, y por consiguiente, se negó la pretensión indemnización invocada.

En punto del salario devengado por el demandante dijo el A quo que, conforme a la prueba documental arrimada, se le pagó al demandante de manera periódica y habitual, bonificación quincenal por la suma de \$850.000, lo que equivale mensualmente a \$1.700.000 y que en relación con este concepto la parte demandada no demostró que el mismo no constituía salario. Resaltó el juez de instancia que se demostró la solidaridad de las codemandadas R & C GOLD S.A.S, y GRUPO SANTILLANA CORPORATIO S.A.S, con el contrato de operación y además por cuanto las labores desempeñadas por el demandante, no eran ajenas a las operaciones de la minería.

En cuanto a la sanción moratoria, dijo el juez de instancia que de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 de. CT, para imponer esta condena requiere mala fe del empleador, la cual en el caso en concreto se encuentra acreditada, por cuanto éste no cumplió con la carga procesal de demostrar lo contrario.

VI.- RECURSO DE APELACIÓN.

Contra esta decisión la curadora ad litem que representa los intereses de todas las entidades codemandadas, interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

Pide que se revoque la sentencia concretamente, en haber calificado como factor salarial las bonificaciones recibidas por el demandante, por cuanto las mismas no son conceptos constitutivos de salario, pues, según el contrato laboral y la certificación que obra dentro del proceso, el actor devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, de suerte que las sumas adicionales no eran constitutivas de salario y no se pueden tener en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y demás obligaciones laborales.

Por otra parte, señala que el A quo incurre en un error al condenar a los reajustes en prestaciones sociales y pago de seguridad social entre el 17 de mayo de 2017 y **el 31 de diciembre de 2018** con base a un salario de \$2.437.717, pues no existe ninguna prueba que el actor devengara mes a mes esa cuantía, máxime que su contrato laboral terminó en abril de 2018.

Solicitó que no se condene al empleador a la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues el GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL S.A.S, ha actuado con buena fe al cancelar al trabajador los salarios, prestaciones sociales y pagar los aportes a la SSSI conforme a las normas que regulan la materia.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la curadora ad litem, quien representa a los demandados, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, exponiendo las razones de hecho y de derecho que consideran deben ser tenidas en cuenta por esta corporación judicial, que se

circunscriben, en síntesis, a los mismos argumentos expuestos ante el juez de instancia.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. - Bonificación - reajuste - sanciones moratorias.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Objeto de la Litis. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la apelación propuesta por la curadora ad litem que representa los intereses de todas las demandadas, deberá la Sala determinar: (i) si, contrario a lo dispuesto por el fallador primario, la bonificación que recibió el demandante durante su relación laboral no es constitutiva de salario; en caso de serlo, (ii) si hay lugar al reajuste de prestaciones sociales y aportes en pensión en los términos señalados por el a quo. (iii) finalmente, se establecerá si hay lugar a la sanción moratoria del artículo 65 del CST impuesta al empleador.

De cara al primer problema jurídico planteado, con relación a las bonificaciones que aduce el demandante son constitutivas de salario, es pertinente traer a colación lo establecido en los artículos 127 y 128 del CSTSS, que indican:

ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Artículo modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: “*Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras,*

valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
“No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”.

Conforme a estas premisas normativas, es menester tener en cuenta que el carácter salarial de lo percibido por el trabajador corresponde a los emolumentos retributivos del empleo que remuneran su actividad y que se caracterizan por su periodicidad.

Ahora, como bien lo indica la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL 1798 de 2018, M.P. María Clara Dueñas Quevedo, Exp 63988:

“...la facultad consagrada en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no permite despojar de incidencia salarial un pago claramente remunerativo, cuya causa directa es el servicio prestado, pues como lo ha sostenido esta Corporación, «la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo» (CSJ 39475, 13 jun. 2012).

Si, con arreglo al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario *«todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte»*, sumado a que el derecho del trabajo, es por definición, un universo de realidades (art. 53 CP), no podrían las partes, a través de acuerdo, contrariar la naturaleza de las cosas o disponer que deje de ser salario algo que por esencia lo es.

En el sub lite, no hay discusión alguna que el demandante JORGE ENRIQUE HIDALGO CASTRILLÓN, recibía una bonificación quincenal por la suma de \$850.000, por parte del GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS, durante toda la relación laboral con la pasiva, en forma habitual, así como también, que no hubo pacto alguno, por escrito, para que tal beneficio no fuera considerado como factor salarial.

Ahora, la Curadora ad litem, afirma que la bonificación no constituye salario, por cuanto de las colillas de pago, como de la certificación emitida por la entidad, se expresa que el demandante devengaba un salario mínimo legal mensual vigente.

Al respecto, el recaudo probatorio en el asunto se circunscribió a la prueba documental aportada exclusivamente por la parte demandante, pues pese a que la parte actora solicitó prueba testimonial, los testigos no concurrieron a la audiencia, como tampoco lo hizo el demandante, citado a absolver interrogatorio de parte por petición expresa de las codemandadas.

Así las cosas, para esta Sala resulta suficiente la prueba documental que obra en el expediente, particularmente los desprendibles de pago que militan en el PFD 03 folios 42 a 53, los cuales dan cuenta que el señor HIDALGO CASTRILLÓN, percibía bonificación quincenal por la suma de \$850.000, pues dicho concepto no fue otorgado de mera liberalidad, sino que el mismo, se realizó de manera periódica y habitual.

En ese orden de ideas, es claro que la bonificación por un valor mensual determinado, es constitutivo del salario del actor en los términos del artículo 127 del CST, como acertadamente lo dispuso el A quo.

Además, frente a dicha bonificación o beneficio otorgado por el empleador, no se dispuso expresamente por las partes que no constituían salario en dinero o en especie, como lo exige el artículo 128 del CST para que sean considerados como no constitutivos de salario, o por lo menos no se probó en el proceso, por lo que el actor tiene derecho a los reajustes solicitados, sobre salarios, prestaciones, y aportes a pensión, teniendo como factor salarial la bonificación en comento. Por tal razón, se confirmará la sentencia objeto de apelación en este tópico.

Ahora advierte esta sala que si bien procede el reajuste frente a las prestaciones antes enunciadas, habrá de **modificarse** los numeral 3º, y 5º de la parte resolutive de la sentencia, pues, como bien lo indicó el juez de primera instancia, el extremo temporal del contrato de obra o labor por el cual se vincularon las partes, inició el **17 de mayo de 2017 y terminó el 29 de abril de 2018**, por lo que la condena a pagar el reajuste de la liquidación final de prestaciones y aportes a la seguridad social, será teniendo en cuenta un salario de \$2.437.717 del 17-may-2017 al 31-dic-2017 y de \$2.500.000 del 1-ene-2018 al 29-abr-2018, resaltando esta sala que se trató de error puramente numérico, queriendo decir 31 de diciembre de 2017 en el primer período, y con relación a la bonificación y al salario devengado en esos períodos .

Y, por último, frente a la indemnización moratoria que pretende el actor, y que es punto de apelación por la parte demandada, cabe recordar que la aplicación de esta sanción no es automática, sino que debe estudiarse en el caso concreto si el empleador obró de buena o de mala fe, como precisa la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3936-2018, Rad. 70860, de 5 de septiembre de 2018, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueña, en la que se indica:

"Esta Corte, reiteradamente, ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables".

De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de *«otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción»* (CS) SL9641-2014).

Como puede advertirse, para la aplicación de la sanción moratoria en comento, el fallador debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador, con fundamento en la prueba recaudada, y demás circunstancias que rodearon la relación laboral, principalmente al momento de terminarse el contrato de trabajo.

Cabe señalar que el artículo 65 CST es claro al determinar que:

*"Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y **prestaciones debidos**, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo..."*

Pues bien, en el **hecho quinto** de la demanda se expresó: **"Al demandante no se le realizó el pago de prestaciones sociales a la terminación del**

contrato correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de abril de 2018, esto es, en cuanto al pago de prestaciones proporcionales (liquidación) y el pago del reajuste de prestaciones sociales durante todo el tiempo de servicio teniendo en cuenta el salario real, esto es, desde el 17 de mayo de 2017 hasta el 29 de abril de 2018”.

Ahora, la parte apelante puso de manifiesto que el GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS, ha actuado de buena fe, por cuanto canceló al demandante los salarios, prestaciones sociales y aportes a la SSSI, con base a la real remuneración percibida por el trabajador; sin embargo, esta manifestación carece de apoyo probatorio.

En efecto, para la colegiatura, no se evidencia razones atendibles que justifiquen que la actuación del GRUPO DE RECUPERACIÓN ECOAMBIENTAL SAS estuvo regida por los postulados de la buena fe, pues no se demostró que durante la vigencia de la relación laboral, el empleador hubiese cancelado la totalidad de las acreencias laborales, singularmente, los meses de enero a abril del año 2018, y además, utilizó la figura de la bonificación, buscando que no se entendiera como constitutiva de salario, la cual evidentemente sí lo es, como se anotó.

Con base en lo anterior y como quiera que no se probó el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del empleador, se confirmará la sanción moratoria impuesta en la sentencia de primer grado.

Costas en esta instancia a cargo de las demandadas, ante la no prosperidad del recurso interpuesto, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de \$300.000.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE los numerales 3º, y 5º de la sentencia de fecha y procedencia conocida, que se conoce en apelación, los cuales quedaran así:

Numeral 3º: Declarar que la bonificación quincenal pagada al demandante constituía salario, y consecuencialmente condenar a la demandada a pagar el reajuste de la liquidación final de prestaciones teniendo en cuenta un salario de \$2.437.717 del 17-may-2017 al 31-dic-**2017** y de \$2.500.000 del 1-ene-2018 al 29-abr-2018.

Numeral 5º Condenar a la demandada a pagar ante la entidad de seguridad social en pensiones en que se encuentre afiliado el demandante los aportes a la seguridad social en pensiones o su reajuste, teniendo en cuenta los siguientes valores: Salario del 17-may-2017 al 31-**dic-2017**: \$2.437.717 y del 1-ene-2018 al 29-abr-2018 de \$2.500.000.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

TERCERO: Costas en esta instancia, a cargo de la parte demandada, ante la no prosperidad del recurso interpuesto, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de \$300.000.

CUARTO: En su debida oportunidad devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción a las partes del proceso.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada